

# Recursos naturales y conflicto social en la Argentina actual

**María Celia Cotarelo\***

\* *Profesora de Historia de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Directora del Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina (PIMSA) e integrante del Grupo de Trabajo Historia Reciente de CLACSO.*

---

La preservación del ambiente y la explotación racional de los recursos naturales constituyen dos de los principales desafíos que enfrenta hoy la humanidad. Ambas cuestiones se encuentran cotidianamente afectadas hoy por la acción del capital financiero. Contaminación del agua, del aire y el suelo; emanación de gases tóxicos y agotamiento de los recursos no renovables, con su secuela de calentamiento global, enfermedades y muertes evitables, son algunos de los flagelos que los pueblos están sufriendo. A la vez, la búsqueda de apropiación y control de los recursos estratégicos por parte de los diversos capitales ha llevado al desarrollo de una política de guerra a nivel mundial, impulsada por las potencias imperialistas<sup>1</sup>.

Como parte de una estrategia global, en las últimas décadas el territorio argentino fue apropiado por el capital financiero a través de distintos mecanismos. Uno de ellos fue el proceso de privatización de empresas estatales, a partir del cual Argentina enajenó el control de sus recursos

estratégicos –el petróleo, la electricidad, el agua, el gas, los minerales– y el control de los transportes y las comunicaciones. Capitales estadounidenses y europeos, junto con socios locales, se repartieron el botín, poniendo fin a cualquier ilusión de soberanía nacional en las condiciones actuales.

Para llegar a esta situación la oligarquía financiera debió destruir las relaciones sociales y políticas dominantes hasta la década de 1970 y construir relaciones nuevas, propias de esta fase de descomposición capitalista<sup>2</sup>. La realización de su hegemonía en la década de 1990 se manifestó en el consenso alcanzado por las políticas neoliberales en la mayor parte de la sociedad. Así, el proceso de privatización de las empresas de servicios públicos fue apoyado con entusiasmo por amplios sectores de la población, incluyendo algunas de las fracciones obreras directamente afectadas. La lucha de los trabajadores que ofrecieron resistencia –como ferroviarios, telefónicos y siderúrgicos– fue derrotada en condiciones de profundo aislamiento social.

Sin embargo, a pesar de esta relación de fuerzas desfavorable para la clase obrera y el pueblo en general, distintas fracciones sociales se movilizaron contra los efectos de esas políticas neoliberales, conformando un proceso de rebelión iniciado en el motín de Santiago del Estero en diciembre de 1993, y que tuvo su punto culminante en la insurrección espontánea de diciembre de 2001 (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2003).

En este trabajo nos referiremos a algunos hechos que formaron parte de este proceso: las protestas que ocurrieron en las llamadas “ciudades petroleras” como consecuencia de la destrucción de relaciones sociales y su reconstrucción en nuevas condiciones a partir de la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y las protestas populares en defensa del ambiente ante la acción de empresas que ponen en peligro la vida de las generaciones presentes y futuras. Si bien son diferentes, ambas protestas tuvieron en común el rechazo a hechos que refieren a la destrucción de fuerzas productivas por parte del capital, en un caso por la expulsión de fuerza de trabajo, y en el otro por la destrucción de recursos esenciales para la vida humana.

### **Protestas en las “ciudades petroleras”**

Durante décadas el estado nacional tuvo el monopolio en la exploración y explotación del petróleo a través de YPF, empresa considerada por el pueblo como un baluarte y símbolo de soberanía nacional. Sus trabajadores se consideraban parte de la “familia ypefiana”. Solían ingresar desde jóvenes y trabajaban allí hasta jubilarse, y en muchas ocasiones sus hijos también eran trabajadores de la empresa. Dio origen a pueblos enteros, cuya actividad económica y social giraba en torno a la empresa; proveía de vivienda

***“Después de algunos años de producida la privatización, trabajadores despedidos de YPF y otros desocupados llevaron a cabo protestas en reclamo de puestos de trabajo en las distintas empresas petroleras o de trabajo en general. El corte de ruta en Cutral C6-Plaza Huin cul en junio de 1996 fue la primera de estas”***

a sus trabajadores y sostenía los clubes deportivos y la vida cultural de la comunidad (Klachko, 2005). Tal era el caso, entre muchos otros, de Cutral-C6 y Plaza Huin cul en Neuqu6n, General Mosconi y Tartagal en Salta, y Cañad6n Seco en Santa Cruz.

Su privatizaci6n, en la d6cada de 1990, implic6 un cambio radical. Su propietario mayoritario pas6 a ser la empresa espa~ola Repsol. La cantidad de trabajadores se redujo dr6sticamente<sup>3</sup>: miles de trabajadores fueron jubilados anticipadamente o se acogieron al “retiro voluntario”, por el cual recibieron altas indemnizaciones. Muchos invirtieron dichas indemnizaciones en peque~os comercios, gran parte de los cuales quebraron. Otros fueron alentados a crear microemprendimientos productivos, por medio de los cuales YPF tercerizaba actividades, y que en muchos casos tambi6n terminaron quebrando.

La reducci6n en el n6mero de trabajadores empleados provoc6 un abrupto aumento en las tasas de desocupaci6n en las localidades petroleras, afect6ndose as6 el conjunto de la actividad econ6mica local. Por ejemplo, en Caleta Olivia y Pico Truncado, donde las tasas de desocupaci6n siempre se hab6an mantenido por debajo del 5%, entre 1993 y 1995 llegaron al 15 y 19% respectivamente, con picos de casi 30% (Luque et al., 2003).

Desde 2003 pareci6 haber un cambio en las pol6ticas seguidas hasta entonces. Durante el gobierno de Kirchner se cre6 la empresa estatal ENARSA, que tiene la concesi6n de 6reas petroleras en el litoral mar6timo y que se asoci6 con Petr6leos de Venezuela para formar Petrosur<sup>4</sup>. Sin embargo, hasta el momento no se advierten progresos significativos en esos proyectos, ni se han revertido en absoluto los efectos del proceso de privatizaci6n.

La oposici6n o resistencia de los trabajadores a los procesos de privatizaci6n, extranjerizaci6n y expuls6n de fuerza de trabajo en la rama petrolera fue escasa a comienzos de la d6cada de 1990. Las altas indemnizaciones por los reti-

ros “voluntarios” constituyeron uno de los mecanismos centrales utilizados para evitar el conflicto laboral y social. A esto se sumó el otorgamiento de acciones de la empresa a trabajadores bajo la figura de “propiedad participada”.



© Juan Chaves

Sin embargo, después de algunos años de producida la privatización, trabajadores despedidos de YPF y otros desocupados llevaron a cabo protestas en reclamo de puestos de trabajo en las distintas empresas petroleras o de trabajo en general. El corte de ruta en Cutral C6-Plaza Huincul en junio de 1996 fue la primera de estas, que alcanz6 repercusi6n nacional. En abril de 1997 se produjo el segundo gran corte de ruta en esas localidades neuquinas. En mayo de ese mismo a6o, desocupados de General Mosconi y Ta rtagal, en Salta, participaron del primer corte de ruta en la zona por los mismos reclamos. All6 volvieron a producirse cortes importantes en diciembre de 1999, mayo y noviembre de 2000, y junio de 2001. Tambi6n en la zona Norte de Santa Cruz, desocupados cortaron las rutas en Caleta Olivi6, Ca6ad6n Seco, Pico Truncado y Las Heras entre 2000 y 2005.

Estos grandes cortes de rutas tuvieron varios rasgos en com6n (Klachko, 2005): se produjeron en ciudades en crisis tras la privatizaci6n de YPF; se prolongaron durante varios d6as (un m6nimo de seis y hasta m6s de veinte); constituyeron no s6lo el bloqueo de las rutas con construcci6n de barricadas, sino tambi6n la virtual toma de cada una de esas ciudades, paralizando las actividades. A partir de 2000, varios incluyeron la toma y destrucci6n de comisar6as y edificios p6blicos y toma de rehenes entre los polic6as, as6 como la toma de empresas petroleras y la amenaza de hacer explotar tanques de combustibles ante el intento de desalojarlos.

Fueron acciones masivas, con miles de manifestantes en las rutas. Contaron con la participación activa del conjunto de la población local: desocupados, trabajadores estatales, docentes, comerciantes, estudiantes, pequeños productores de la zona, entre otros. Las decisiones fueron tomadas en asamblea en las rutas o en las plazas principales de los pueblos. Estas prácticas de “democracia directa” fueron de la mano de una crisis de representación evidenciada en el repudio a funcionarios, políticos y dirigentes en general. Los dirigentes de la lucha eran elegidos en el piquete, formándose “comisiones de vecinos” que estaban encargadas de transmitir el mandato de la asamblea<sup>5</sup>.

Además del reclamo de trabajo, incluyeron demandas generales como el reembolso por parte del estado nacional de las regalías por el petróleo y el gas, inversión en obras públicas, medidas que tendieran a la reactivación de la zona, así como demandas propias de las distintas fracciones sociales involucradas. Los reclamos se dirigieron hacia los gobiernos municipales, provinciales y nacional; y, principalmente en Salta y Santa Cruz, hacia las empresas petroleras que operaban en la zona.

En el transcurso de la lucha se produjeron divisiones entre los participantes. Por lo general, las fracciones de pequeña burguesía asalariada y no asalariada lograron satisfacer sus demandas más rápidamente, por lo que se mostraron más proclives a firmar acuerdos con los gobiernos y a levantar los cortes antes que otras fracciones, en particular, los trabajadores desocupados.

Los gobiernos movilizaron fuertes contingentes de sus fuerzas armadas (policía provincial y gendarmería) para desalojar las rutas. Ante el avance de las tropas, los piqueteros respondieron con piedras, bombas molotov y palos, y en Salta con armas de fuego, mostrando alta disposición al enfrentamiento. Como resultado de los choques hubo numerosos detenidos y heridos. A la vez, se produjeron cuatro de las muertes en protestas durante los últimos años: Teresa Rodríguez en Cutral Có en 1997, Aníbal Verón en General Mosconi en noviembre de 2000, y Carlos Santillán y José Barrios en General Mosconi en junio de 2001.

Estos hechos presentan un desarrollo similar al del conjunto de los hechos de rebelión del período (Cotarelo e Iñigo Carrera, 2004). Los cortes de Cutral Có de 1996 y de General Mosconi-Ta rtagal de 1997 fueron llevados adelante por fracciones obreras –trabajadores ocupados y desocupados– y de pequeña burguesía conjuntamente. Se produjeron en un momento de ascenso en las luchas, medido por la unidad al interior de la clase obrera y su capacidad para establecer alianzas con otras fracciones sociales. En el corte de Cutral Có en 1997 ya se observan algunos rasgos del momento descendente que tuvo origen a mediados de ese año: comenzó como una protesta de docentes, a la que se sumaron trabajadores desocupados. Pero mientras estos últimos plantearon continuar la lucha, asu-

miendo la identidad de “fogoneros”, los docentes levantaron la huelga que llevaban a cabo y plantearon el levantamiento del corte de ruta. El corte de General Mosconi en diciembre de 1999 también se realizó durante el momento descendente en las luchas.

Por el contrario, si bien el siguiente gran corte en General Mosconi fue llevado a cabo por desocupados beneficiarios de planes sociales, recibió el apoyo del conjunto de la población de las ciudades de la zona, a la vez que en el resto del país numerosos sectores se expresaron en contra de la acción de la gendarmería, que derivó en heridos y detenidos. Este corte, realizado en mayo de 2000, se produjo en los comienzos de un nuevo momento de ascenso. Lo mismo sucedió en noviembre de 2000, cuando desocupados beneficiarios de planes de empleo, trabajadores despedidos de la empresa provincial de electricidad EDESA y de la empresa de ómnibus Atahualpa, deudores del Banco Nación e indígenas, cortaron nuevamente la ruta. Esta situación volvió a repetirse en junio de 2001, cuando desocupados y obreros de la construcción realizaron un nuevo corte de la ruta en General Mosconi en demanda de aumento salarial, mayor cantidad de planes de empleo y alimentos, un plan de obras públicas para generar empleo y el reembolso de las regalías petroleras y gasíferas. Por último, los últimos cortes en la zona Norte de la provincia de Santa Cruz, en el Sur del país, realizados por desocupados en demanda de puestos de trabajo en las petroleras, si bien fueron importantes se efectuaron en condiciones de aislamiento relativo, tendiendo a predominar la fractura al interior de la clase obrera y la falta de alianzas con otras fracciones.

Por otra parte, el relativamente reducido grupo de trabajadores que permaneció en la empresa Repsol-YPF, así como los de otras petroleras extranjeras (que incrementaron su presencia en la última década), protagonizaron según nuestro registro cuarenta y cinco acciones desde 1994 hasta la fecha. Se trató principalmente de huelgas y manifestaciones en reclamo de aumento de salarios y por

***“Si bien el siguiente gran corte en General Mosconi fue llevado a cabo por desocupados beneficiarios de planes sociales, recibió el apoyo del conjunto de la población de las ciudades de la zona”***

mejores condiciones de trabajo; pero también, entre estas, se encuentran una huelga declarada por el Sindicato del Petróleo y Gas Privados y la participación en un acto organizado por las empresas contratistas en febrero de 2002 en rechazo a la decisión del gobierno nacional de gravar con un 20% las exportaciones del petróleo (retenciones), por considerar que podría dar lugar a despidos masivos<sup>6</sup>. Por lo tanto, los trabajadores que lograron insertarse en las nuevas condiciones se movilizaron también en algunos casos en defensa de los intereses de los empresarios petroleros por temor a perder esa posición<sup>7</sup>, en detrimento de intereses más generales<sup>8</sup>.

En relación a ello, distinta ha sido la posición de otras fracciones obreras en los últimos años, aunque su acción no se desarrolló en las ciudades petroleras sino en otras ciudades del país, en particular Buenos Aires. En mayo de 2002, integrantes de la Federación de Gremios de la Energía y desocupados marcharon a la sede de Repsol-YPF en Buenos Aires "en defensa de la soberanía energética". Ante el anuncio oficial del proyecto de creación de una empresa de energía estatal (ENARSA), los dirigentes del sindicato de trabajadores de estaciones de servicio reunieron 50 mil firmas y las llevaron a los diputados a fin de presionar para la sanción de la ley. En marzo de 2005 grupos de desocupados nucleados en organizaciones piqueteras que apoyan al gobierno del presidente Kirchner, sumándose a un boicot propuesto por este contra la empresa Shell por haber dispuesto un aumento en el precio de las naftas, se movilizaron expresando su apoyo a la empresa ENARSA. En noviembre de 2004, manifestantes se concentraron en una estación ferroviaria en Buenos Aires en reclamo de la reestatización de las empresas con la consigna "El agua, la energía, el acero, los transportes, los puertos, el correo, todos son nuestros". En este sentido, a partir de la insurrección espontánea de 2001, diferentes fracciones de trabajadores ocupados y desocupados se movilizaron por la reestatización de YPF y otras empresas o por la creación de una empresa estatal a fin de que el estado recuperara el control de los recursos, siendo que en muchos de estos casos lo hicieron a partir de iniciativas tomadas por el gobierno nacional.

### **Protestas en defensa del ambiente**

La acción de organizaciones ambientalistas no es nueva en Argentina. Desde hace varios años se han sucedido las protestas de alto impacto mediático por parte de pequeños grupos de militantes, en particular de Greenpeace. Pero más recientemente se han producido protestas masivas protagonizadas por pobladores de distintos lugares del país en defensa del ambiente y las reservas naturales. Así, en 1998 y en 2003 indígenas protestaron por la construcción de gasoductos en sus tierras. Desde mayo de 2004, campesinos de General Pizarro, en Salta, protestan por la venta de una reserva natural. Desde 2001, en el Gran Buenos Aires creció el número de protestas



© Surai Azcárate

de vecinos por la instalación de basurales en los barrios. Pero las principales protestas fueron las de los habitantes de Esquel, en Chubut, en 2002 y 2003, y de Gualeguaychú, en Entre Ríos, en 2005.

En 2002 la empresa canadiense Meridian Gold presentó un proyecto para explotar un yacimiento de oro y plata en Esquel que crearía 400 puestos de trabajo directos y otros 1.200 indirectos. La mayoría de los pobladores, que al principio se mostraron de acuerdo con el proyecto, lo rechazaron al enterarse de que se usaría cianuro, porque contaminaría las fuentes de agua y destruiría el ecosistema. Se autoconvocaron, y en diciembre convocaron a una masiva caravana en distintas ciudades de la provincia de Chubut. Por su parte, el concejo deliberante aprobó una ordenanza que prohibía el uso de cianuro en su ejido. En enero de 2003, 3 mil “vecinos autoconvocados” realizaron una nueva caravana hacia las oficinas de la empresa. Participaron asambleas vecinales, grupos ambientalistas, agrupaciones indigenistas, comerciantes locales y empresarios turísticos.

Nuevamente, en febrero de 2003, se movilizaron 2 mil pobladores en Esquel repudiando a todos aquellos que apoyaban el proyecto, entre ellos el gobernador de la provincia y el intendente. Días después, en un acto oficial, mil manifestantes expresaron su oposición al proyecto, mientras otros 150 –entre ellos, desocupados de la rama de la construcción agrupados en la Unión Obrera de la Construcción– manifestaron su apoyo.

El 23 de marzo se realizó un plebiscito, con alta participación ciudadana: más del 80% (11.046) de los ciudadanos votó contra el proyecto, mientras que sólo 2.561 votaron



por la aprobación. Ante este resultado, el gobernador anunció la suspensión indefinida del proyecto minero. Tras este triunfo popular sobre los intereses de una empresa extranjera respaldada por los gobiernos locales (provincial y municipal), pobladores de otras zonas encararon la resistencia a proyectos similares. Por ejemplo, en octubre de 2004 los habitantes de Gualjaina, en Chubut, se movilizaron contra la exploración de oro aluvional por parte de la empresa minera Trinidad Vial SRL, logrando que esta se retirara de la zona.

Asimismo, en agosto de 2005, en Andalgalá, Catamarca, mil agricultores, artesanos, empresarios e indígenas repudiaron los trabajos que realizaba la empresa minera Agua Rica, en defensa de la preservación del agua y el ambiente. Y, en septiembre de 2005, 3 mil vecinos y productores agropecuarios cortaron una ruta en el valle de Uco, en Mendoza, para rechazar las tareas de exploración de una subsidiaria de una empresa canadiense en una mina de oro y cobre en la que se utilizaría cianuro de sodio.

Por su parte, a fines de abril de 2005, en el puente internacional que une Gualeguaychú (Argentina) con Fray Bentos (Uruguay), más de 30 mil comerciantes, docentes, empleados y obreros se movilizaron respondiendo a la convocatoria de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú contra la instalación de dos grandes plantas de fabricación de pasta celulósica en Fray Bentos, sobre la costa del río Uruguay. La instalación de estas plantas, pertenecientes a una empresa española y a una finlandesa respectivamente, fue aprobada por el gobierno de Uruguay. Las movilizaciones se repitieron en julio, cuando se realizaron tres marchas, tras las cuales la Cancillería argentina anunció que exigiría al gobierno uruguayo la paralización de la construcción de las papeleras.

## **A modo de conclusión**

A comienzos de la década de 1990 buena parte de la sociedad argentina contempló, pasiva o entusiastamente, la entrega de nuestro petróleo y demás recursos al capital extranjero. Las empresas petroleras han vendido su producto internamente a precios internacionales y, según algunos cálculos, en pocos años más agotarán nuestras reservas. Este saqueo se lleva a cabo con la anuencia incluso de una parte de los trabajadores insertos en la rama, que hasta el momento se han alineado con sus patrones.

Si bien en los últimos años ha habido protestas en que se planteó la reestatización de YPF o el apoyo a la creación de una empresa estatal, hasta el momento las mismas no han sido masivas. Las protestas desarrolladas en las ciudades petroleras tuvieron como reclamos centrales la creación de empleo a través de la reactivación de las zonas, trabajo en las plantas petroleras o planes de empleo. Pero, más allá de los reclamos, la signi-

ficación de esas protestas consistió en la aparición y desarrollo de algunas prácticas de organización y de lucha que se hicieron presentes en la insurrección espontánea de 2001, punto más alto del proceso de rebelión en Argentina en el período actual.

En cuanto a las protestas en defensa del ambiente, y en particular el agua, han logrado frenar, en algunos casos, la acción de empresas dispuestas a explotar recursos naturales sin la más mínima preocupación por las consecuencias ambientales. También han puesto de manifiesto una mayor preocupación social acerca de la preservación y el control de recursos, por cuya apropiación se plantearán conflictos en un plazo probablemente no muy lejano.

En la medida en que logre formarse un movimiento que tenga entre sus metas fundamentales el control popular de los recursos estratégicos en este territorio, podrá empezar a plantearse no sólo la posibilidad de una política soberana, sino incluso nuestra propia supervivencia; y en tanto estos procesos logren articularse en un movimiento popular latinoamericano, podrán tener éxito.

## Bibliografía

Cotarelo, M. C. e Iñigo Carrera, N. 2004 *Algunos rasgos de la rebelión en Argentina 1993-2001* (Buenos Aires: PIMSA) Documento de Trabajo N° 49.

Favaro, Orietta; Arias Bucciarelli, Mario e Luomo, Graciela 1999 "Políticas de ajuste, protestas y resistencias. Las puebladas cutralquenses" en Favaro, O. (ed.) *Neuquén. La construcción de un orden estatal* (Neuquén: Cehepyc/CLACSO/Universidad Nacional del Comahue).

Iñigo Carrera, Nicolás y Cotarelo, María Celia 2003 *La insurrección espontánea. Argentina diciembre 2001* (Buenos Aires: PIMSA) Documento de Trabajo N° 43.

Klachko, Paula 2005 "Las consecuencias políticas y sociales de la privatización de YPF. El impacto en las localidades de Cutral Có y Plaza Huincul" en *Realidad Económica* (Buenos Aires: IADE) N° 209.

Luque, Élida; Martínez, Susana; Auzoberría, Miguel y Huenul, Hugo 2003 *Conflictos sociales en la provincia de Santa Cruz. Los años noventa* (Buenos Aires: PIMSA) Documento de Trabajo N° 41.

## Notas

1 Esta política incluye las denuncias estadounidenses sobre la presencia de presuntas células terroristas en la Triple Frontera (Argentina, Paraguay y Brasil) y la presencia creciente de tropas de ese país en Paraguay, que son atribuidas por diversos analistas a sus intenciones de controlar el Acuífero Guaraní.

2 Esta destrucción-construcción de relaciones sociales se produjo a través de un proceso cuyos hitos fueron la llamada guerra antisubversiva, la guerra de Malvinas en 1982, la forma en que se desarrolló la salida electoral en 1983 y las hiperinflaciones de 1989 y 1990.

3 Unos 3.500 trabajadores quedaron sin trabajo en Cutral C6-Plaza Huinul, y otros 3.500 en Tartagal.

4 También se creó Líneas Aéreas Federales para absorber a los empleados de Lapa y Dinar; Correo Oficial SA; Arsat, que se quedó con la concesión de la órbita satelital que tenía la privada Nahuelsat; le quitaron la concesión del Ferrocarril San Martín a la empresa Metropolitano; y se reestatizó el control del espectro radioeléctrico, que estaba concesionado a la francesa Thales.

5 Dos de los principales dirigentes surgidos de los cortes de ruta en General Mosconi y Tartagal eran ex trabajadores de YPF, despedidos en 1991 luego de 17 y 14 años de trabajo respectivamente, e hijos a la vez de un trabajador de YPF. Invirtieron la indemnización en un negocio, que quebró unos años después.

6 Por el contrario, el Frente Gremial y Social (sindicatos docentes, de judiciales y personal jerárquico) no se sumó a la protesta "para no ser cómplices del chantaje de las petroleras. Acompañamos al obrero en caso de que haya despidos, pero no de este modo perverso" (*La Nación*, 19/2/02).

7 Debe tenerse presente también que se trata de trabajadores relativamente muy bien pagos. Un operario de boca de pozo en Comodoro Rivadavia en 2005 gana unos \$3.000 pesos, mientras que los ingresos promedio en la ciudad son de \$680 (*Clarín*, 11/9/05).

8 Parte de los ingresos obtenidos por el estado nacional debido al aumento en las retenciones fue destinada al pago de los planes Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.